



Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas

Casos contenciosos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos contra Colombia

Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia
Sentencia de 30 de noviembre de 2012



**Defensoría
del Pueblo**
COLOMBIA



CASO MASACRE DE SANTO DOMINGO VS COLOMBIA

Sentencia de 30 de noviembre de 2012



CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA

Defensor del Pueblo

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN

Vicedefensor

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN

Secretario General

ÁLVARO FRANCISCO AMAYA VILLARREAL

Director Nacional de Promoción y Divulgación

PAULA ROBLEDO SILVA

Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales

La elaboración y coordinación de esta cartilla estuvo a cargo de la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales

Autores:

Jorge Ernesto Roa Roa (Consultor)

Ana María Sánchez Guevara (Asesora)

Sneither Cifuentes (Asesor)

Diseño, diagramación, corrección de estilo:

BUENOS Y CREATIVOS S.A.S

Nicole Gómez

Impresión:

BUENOS Y CREATIVOS S.A.S

Cartilla de distribución gratuita.

El texto se puede reproducir, fotocopiar o replicar siempre que se cite la fuente.

Defensoría del Pueblo

Carrera 9 No. 16 - 21, Bogotá, D.C.

Primera edición 2018

ISBN Obra general. Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas: casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia 978-958-8895-77-2

ISBN 978-958-8895-84-0

Contenido

Prólogo	4
Presentación	8
Hechos	18
Análisis de fondo realizado por la Corte Interamericana	25
Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial	
Violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a medidas de protección de niños y niñas	
Violación al derecho de circulación y residencia, y a la propiedad privada	
Violación del derecho a la honra	
Medidas de reparación y órdenes de la Corte Interamericana	36
Medidas de satisfacción	
Medidas de rehabilitación	
Medidas de restitución	
Otras medidas solicitadas	
Indemnización	
Costas y gastos	

Prólogo

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fueron adoptadas en 1948 dentro del marco de la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en medio de uno de los capítulos más aciagos de la historia de violencia sociopolítica de nuestro país: el “Bogotazo”.

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán ocurría –paradójicamente o como un presagio- mientras los mandatarios de 21 Estados reunidos en la capital colombiana suscribían una Declaración para reconocer el derecho a la vida, el derecho de libertad de palabra y de expresión, entre otros.

Estos antecedentes remotos permiten observar que la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, lejos de ser una tarea sencilla, ha sido una historia marcada por episodios de oscuridad, donde los más elementales derechos del ser humano resultan desconocidos.

No obstante, el loable objetivo de consolidar en las Américas un régimen de libertad y justicia social basado en la solidaridad y el respeto por las instituciones democráticas, encontró en la creación del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) una herramienta fundamental.

Desde 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano principal y autónomo de la OEA encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, así como de desempeñarse como órgano consultivo especializado en esa materia.

De otra parte, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trabajo produjo la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), piedra angular del funcionamiento del SIDH que entró en vigencia el 18 de julio de 1978.

Al año siguiente, la CIDH fue instalada de forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y desde entonces la labor de ambos órganos ha sido significativa para velar por la observancia de las libertades y los derechos consagrados en la CADH, sus dos protocolos adicionales e instrumentos regionales como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros.

Precisamente, en ejercicio de su competencia contenciosa la Corte IDH ha proferido en contra del Estado colombiano un total de 19 sentencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde además de adjudicar la responsabilidad internacional, se han diseñado y consolidado los contornos de los derechos reconocidos por los instrumentos interamericanos de derechos humanos, como un aporte directo a la ciudadanía de las Américas. No obstante, por tratarse de documentos jurídicos de una elaboración sofisticada y de conceptos jurídicamente complejos, su difusión puede resultar limitada.

Por ello, en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de nuestras funciones como Institución Nacional de Derechos Humanos, y buscando siempre evitar la re-victimización mediante un diálogo constructivo con las propias víctimas y sus representantes, con las autoridades públicas encargadas de proteger sus derechos y con la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos elaborado un proyecto al que denominamos “Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas: casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia”.

Se trata de una serie de 19 cartillas que resumen de manera sencilla y accesible los hechos, estándares y medidas de reparación establecidos en cada una de las sentencias contenciosas proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia. Nuestro objetivo primordial es contribuir a que se amplie el conocimiento del contenido de esos fallos en un lenguaje común y de fácil acceso a todos los públicos, entendiendo que el compromiso de fortalecer la construcción de paz en los territorios, incluye dar a conocer estos hechos para garantizar que no vuelvan a repetirse.

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
DEFENSOR DEL PUEBLO

Presentación

La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) es la encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en Colombia, según lo establece el artículo 282 de la Constitución. Para lograr este objetivo realiza diversas actividades como fomentar el cumplimiento del derecho internacional, orientar y asesorar a la ciudadanía residente en el país y en el exterior en el ejercicio de sus derechos, entre otras.

Así, la Defensoría del Pueblo firmó un acuerdo marco de cooperación institucional con la Corte Interamericana en el 2015, que tiene como finalidad fortalecer el trabajo mutuo, en aras de fortalecer el compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde entonces, la entidad ha comenzado un trabajo de sistematización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de reparación dadas al Estado colombiano en los casos donde dicho tribunal ha declarado su responsabilidad internacional.

En este contexto, se ha puesto en marcha una estrategia institucional para acompañar a las víctimas en el proceso de ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, siendo el primer paso la difusión, en un formato sencillo, de cada una de esas decisiones. Por esa razón, en cada cartilla usted podrá encontrar una visión completa, clara y concreta de la información básica de los casos condenatorios en relación con Colombia, que incluye la identificación y el perfil de las víctimas, los hechos más relevantes, los derechos

declarados como vulnerados, así como se sintetizan las principales consideraciones del tribunal y las medidas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se responden algunas preguntas con aspectos básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura.

¿Qué es y cómo está conformado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El Sistema fue creado por los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su objetivo principal es garantizar el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el continente. Para ello, tiene dos órganos independientes y complementarios: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana o Corte IDH).

La CIDH fue creada en 1959. Es un organismo cuasijurisdiccional que busca promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Ejerce esta función por medio de visitas a los países, actividades temáticas, informes sobre la situación de derechos humanos en relación con un tema o un país, medidas cautelares y solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Asimismo, la Comisión puede analizar peticiones individuales sobre violaciones específicas a derechos humanos atribuibles a los Estados americanos, de modo que es el mecanismo de ingreso de un caso ocurrido bajo la jurisdicción de alguno de esos Estados.

Por su parte, la Corte Interamericana es el órgano de carácter judicial del Sistema. Su función es determinar la responsabilidad internacional de los Estados, teniendo presente que para poder estudiar un caso, este debe ser enviado por la Comisión (peticiones individuales) o por un Estado (denuncia interestatal). El tribunal solo puede analizar la violación de normas interamericanas, en especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Bajo qué condiciones un caso de violaciones a los derechos humanos puede llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Toda persona puede presentar un caso de violación a los derechos humanos cuando estime que un Estado no remedió la vulneración o incumplió alguna obligación interamericana. Tal petición individual referida a violaciones a derechos humanos reconocidos por tratados interamericanos no necesita representante y el procedimiento es gratuito.

La denuncia puede ser por la violación de un derecho humano por la acción de un Estado (como consecuencia de una acción directa de los agentes del Estado), su aquiescencia (por el consentimiento tácito del Estado o de sus agentes), o su omisión en la garantía y protección de ese derecho (cuando el Estado o sus agentes no actúan cuando debían hacerlo).

Asimismo, para que la Comisión pueda analizar el caso se tienen que cumplir otros requisitos: (i) se deben agotar los recursos judiciales internos. Esto significa que las autoridades del Estado debieron contar con la posibilidad de detener la violación o reparar los daños causados, pero no lo hicieron; (ii) la petición se debe presentar a la Comisión dentro de un plazo de seis meses que se computan desde que se agotó la vía interna. En casos excepcionales, se puede acudir a la CIDH sin agotar los recursos internos, cuando se esté en posibilidad de probar que: (i) las leyes internas no establecen un debido proceso y, por ende, la víctima no ha podido acceder a la justicia; (ii) existe una demora injustificada en el trámite del respectivo proceso; y (iii) la víctima no puede pagarse un representante judicial y el Estado no ofrece ese servicio de manera gratuita.

La Comisión no puede declarar la responsabilidad internacional de ningún Estado, sino que una vez analizado el caso, elabora un informe y si encuentra que hay vulneraciones a los derechos humanos, le formula recomendaciones al Estado. En el supuesto de que este no cumpla con tales recomendaciones, la CIDH puede publicar el informe y enviar el caso a la Corte IDH.

¿Qué sucede cuando un caso llega a la Corte Interamericana?

Corresponde a la Corte Interamericana determinar si hay vulneración o no de derechos. En caso afirmativo, declara responsable al Estado y lo obliga a reparar el daño. Dicha reparación debe ser integral y suele incluir las siguientes medidas:

- Restitución: cuando es posible volver a la situación previa a la vulneración de los derechos.
- Indemnización: aquí se determina un monto de dinero por los daños materiales e inmateriales.
- Rehabilitación: esto incluye tratamientos médicos y psicológicos para superar el daño sufrido.
- Satisfacción: estas son medidas de carácter simbólico, conmemorativo, colectivo y honorífico que buscan reparar los perjuicios no materiales.
- Garantías de no repetición: con ellas se busca crear mecanismos judiciales, legales y administrativos que tengan como fin evitar que se cometan nuevas vulneraciones a los derechos humanos.

Finalmente, una vez dictada la sentencia, la Corte hace seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación.

¿En Colombia quién debe cumplir estas órdenes de reparación?

Colombia es un Estado miembro de la OEA y ratificó las convenciones interamericanas que dan competencia a la CIDH y a la Corte Interamericana para declarar que un Estado ha vulnerado derechos humanos. De esta forma, el Estado colombiano se encuentra obligado a satisfacer y respetar los derechos reconocidos en esas normas y también a cumplir con las órdenes contenidas en las sentencias.

Al respecto, la Corte Constitucional colombiana ha puesto de presente que el Estado debe cumplir en forma oportuna y plena todas las órdenes dadas por la Corte Interamericana, de modo que no puede elegir cuál cumplir y cuál no, ni tampoco reducir o limitar su alcance. Asimismo, tampoco puede poner obstáculos ni oposiciones para su cumplimiento.

De acuerdo con la arquitectura institucional existente, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la responsabilidad de coordinar con las distintas autoridades internas el cumplimiento de las órdenes. Para esto, tiene la potestad de conminarlas a acatar inmediatamente los fallos del Sistema.

Caso Masacre de Santo Domingo vs Colombia
Sentencia de 30 de noviembre de 2012

Víctimas

Levis Hernando Martínez Carreño
Teresa Mojica Hernández de Galvis
Edilma Leal Pacheco
Salomón Neite
María Yolanda Rangel
Pablo Suárez Daza
Carmen Antonio Díaz Cobo
Nancy Ávila Castillo (o Abaunza)
Arnulfo Arciniegas Velandia (o Calvo)
Luis Enrique Parada Roperó
Rodolfo Carrillo
Jaime Castro Bello
Luis Carlos Neite Méndez
Oscar Esneider Vanegas Tulibila
Geovani Hernández Becerra
Egna Margarita Bello
Katherine (o Catherine) Cárdenas Tilano
Alba Yaneth García
Fernando Vanegas
Milciades Bonilla Ostos
Ludwing Vanegas
Xiomara García Guevara
Mario Galvis
Fredy Monoga Villamizar (o Fredy Villamizar Monoga)
Mónica Bello Tilano

Víctimas

Maribel Daza
 Amalio Neite González
 Marian Arévalo
 José Agudelo Tamayo
 María Panqueva
 Pedro Uriel Duarte Lagos
 Ludo Vanegas
 Adela Carrillo
 Alcides Bonilla
 Fredy Mora
 Marcos Neite
 Erinson Olimpo Cárdenas
 Ricardo Ramírez
 Hilda Yuraime Barranco
 Lida Barranca
 Yeimi Viviana Contreras
 Maryori Agudelo Flórez
 Rosmira Daza Rojas
 Neftalí Neite
 Miembros del caserío de Santo Domingo ¹

Representantes

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
 Humanidad Vigente Corporación Jurídica
 Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
 Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga)
 Abogado Douglass Cassel
 Abogado David Stahl
 Abogada Lisa Meyer

¹ Ver anexos I, II y III de la sentencia de fondo.

Tema

En el caso, se estudia la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el bombardeo perpetrado el 13 de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea Colombiana en la vereda de Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca. En dicho bombardeo, se utilizó un dispositivo tipo cluster que causó la muerte de diecisiete civiles, heridas a veintisiete civiles y numerosas personas desplazadas de manera forzada².

Derechos de la Convención Americana vulnerados

Artículo 1. (Obligación de respetar los derechos)³
Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)
Artículo 4. (Derecho a la vida)
Artículo 5. (Derecho a la Integridad Personal)
Artículo 8. (Garantías judiciales)
Artículo 19. (Derechos del niño)
Artículo 21. (Derecho a la propiedad privada)
Artículo 22. (Derecho de circulación y residencia)
Artículo 25. (Protección Judicial)

Derechos de otras Normas Internacionales vulnerados

Convenios de Ginebra de 1949 - Naciones Unidas

Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional

Derecho internacional humanitario consuetudinario⁴

Principios rectores de los desplazamientos internos - Naciones Unidas 1998

² Para más información, ver la ficha técnica elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=237&clang=e

El texto completo de la sentencia se puede encontrar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf

³ La Corte Interamericana señaló violado el artículo 1.1 en relación con los demás derechos que se mencionan en este apartado.

⁴ Como norma de interpretación complementaria a la normativa convencional.

Hechos

En 1998, había una situación de violencia generalizada en el departamento de Arauca, que generó un incremento de la militarización en el territorio (párr. 57). La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC) estaban asentadas en el mismo departamento, la primera desde los años sesenta y la segunda desde los años noventa (párr. 58).

El 12 de diciembre de 1998, en la vereda de Santo Domingo se llevó a cabo un “bazar”, por lo cual se encontraban en la vereda visitantes de poblaciones cercanas (párr. 60).

Ese mismo día, una avioneta Cessna aterrizó con dinero o armas para actividades de narcotráfico en la carretera que conduce de la vereda de Santo Domingo a Panamá de Arauca o Pueblo Nuevo, en una pista clandestina ubicada en el sitio de Caño Verde. La avioneta fue seguida por un helicóptero Black Hawk del Ejército y, al aterrizar, las tropas del Batallón Contraguerrilla N.º 36 y varias unidades de la Fuerza Aérea de Colombia (en adelante FAC) “procedieron a inmovilizar la avioneta”. Sin embargo, la operación fue interrumpida por un grupo guerrillero que se enfrentó a las tropas (párr. 61).

Tras haber sido frustrada la inmovilización de la avioneta, las Fuerzas Armadas planearon una operación militar aerotransportada. En el marco de dicha operación, la XVIII Brigada del Ejército y el Batallón Contraguerrilla N.º 36 en ejecución de las operaciones militares denominadas Relámpago y Pantera, respectivamente; operación militar que duró varios días (párr. 61).

Por otra parte, se debe precisar que en el interior de la FAC se discutió la planificación de la operación, en especial lo atinente a los medios que se iban a utilizar (párr. 62). Finalmente, se dispuso utilizar varias aeronaves, una de ella cargada con un dispositivo cluster AN-M1A2, compuesto por granadas o bombas de fragmentación⁵, cuyo propósito era atacar personas o carros ligeros (párr. 62 y 63).

Cerca de las 16:00 horas del mismo día, varias aeronaves sobrevolaron la zona mientras se efectuaban disparos en zonas cercanas a la vereda de Santo Domingo. Asimismo, el mayor J.M.G., comandante del Batallón Contraguerrilla N.º 36, ordenó desarrollar operaciones de registro y control militar de área en el sector cercano a la vereda, con el propósito de capturar al grupo subversivo que delinquía en el sector (párr. 64). Sumado a lo anterior, el comandante emitió una orden para iniciar las operaciones fragmentarias Pantera II, cuya misión “[consistía] en efectuar una operación ofensiva de contraguerrillas realizando un movimiento aerotransportado [...] hasta llegar al área de Santo Domingo”, las cuales comenzarían el 13 de diciembre de 1998 a las 6:00 a.m. (párr. 65).

Precisa además la Corte que frente a las órdenes establecidas antes, existen pruebas de que los disparos se intensificaron en la noche del 12 de diciembre, cesaron en la madrugada y se reanudaron el 13 de diciembre de 1998 alrededor de las 5:30 a.m. (párr. 66).

El 13 de diciembre de 1998, las siguientes aeronaves sobrevolaron los alrededores de Santo Domingo en la mañana, especialmente a partir de las 09:00 a.m.:

- i) helicóptero Black Hawk UH 60L artillado, bajo el mando del Mayor S.G. (nombre de identificación o “call sign”: “Arpía”);
- ii) helicóptero UH1H 4407 que portaba bombas cluster, pilotado por el Teniente C.R.P. (nombre de identificación o call

⁵ “Estas granadas o bombas de fragmentación están diseñadas para lanzamiento aire-tierra desde una aeronave y cuando explotan se fragmentan en esquilras que se esparcen” (párr. 63)

sign: “Lechuza”); iii) helicóptero Hughes–500 artillado, al mando del Teniente L.S. (nombre de identificación o call sign: “Hunter”); iv) avión Skymaster tripulado por dos extranjeros y el Capitán de la Fuerza Aérea Colombiana C.G. (nombre de identificación o call sign: “Gavilán”); v) helicóptero UH 60, piloteado por el Capitán R.G.G. (nombre de identificación o call sign: “Spock”), y vi) helicóptero MI 17 de la empresa Heliandes piloteado por un civil (nombre de identificación o call sign: “Pegasso”) (párr. 68).

En el desarrollo de las operaciones a las 10:02:09 a.m., la tripulación del helicóptero UH1H 4407 de la FAC, integrada por el piloto teniente C.R.P., el copiloto teniente J.J.V. y el técnico de la aeronave H.M.H.A., lanzó un dispositivo cluster AN-M1A2 (párr. 69).

El dispositivo fue lanzado a las 10:02:09 del 13 de diciembre de 1998 sobre la zona urbana de la vereda Santo Domingo, cayendo en la calle principal de la vereda (párr. 210). Esto fue comprobado por el dictamen de inspección y el estudio de balística y explosivos de la Fiscalía General de la Nación, y en las conclusiones de la sentencia del Juzgado 12 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y las sentencias falladas en la jurisdicción contencioso-administrativa (párr. 200 a 209).

“Posteriormente, luego de las 10:00 a.m, la FAC utilizó las ametralladoras desde las aeronaves en contra de las personas que se desplazaban en la carretera en dirección opuesta a la vereda (párr. 74). Por esto, la población de la vereda de Santo Domingo tuvo que abandonar sus hogares y movilizarse al corregimiento de Betoyes, y otros lugares dentro de los municipios de Tame y Saravena en el departamento de Arauca (párr. 75).

Como consecuencia de los hechos acaecidos entre el 12 y el 14 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, resultaron muertas diecisiete personas, entre ellas seis niños y niñas, y veintisiete personas heridas, entre ellas diez niños y niñas (párr. 70).

Transcurridos los hechos, el 15 de diciembre de 1998 el entonces secretario de Gobierno del municipio de Tame expresó en una declaración que: “Al menos unas 200 personas han abandonado veredas y caseríos cercanos a Santo Domingo y han [llegado] a esa localidad buscando la protección del Gobierno y la seguridad para sus hijos. En camiones, los desplazados han salido de la zona de combates huyendo del enfrentamiento armado” (párr. 76). Después del 13 de diciembre, y como consecuencia de los hechos ocurridos ese día, la vereda quedó deshabitada hasta enero de 1999, cuando el departamento de Arauca y el Instituto de Desarrollo Araucano firmaron un convenio interinstitucional de cooperación, con el objetivo de reubicar, reconstruir y mejorar las 47 viviendas de Santo Domingo⁶ (párr. 77 y 78).

Debido a la gravedad de los hechos, el 14 de diciembre de 1998 se iniciaron dos investigaciones simultáneas al respecto, una en la justicia ordinaria y otra en la justicia penal militar. En la primera, la Fiscalía 41 Delegada ante los Jueces del Circuito de Tame dispuso la apertura de la investigación previa el 14 de diciembre; y en la segunda, el entonces comandante general de las Fuerzas Militares solicitó el 15 de diciembre que se investigaran los hechos, por los cuales el Juzgado de Primera Instancia de Apiay (Meta) asumió conocimiento (párr. 80).

Asimismo, el 17 de diciembre de 1998 un fiscal regional de la Unidad Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación preliminar por los mismos hechos, bajo número de radicado 419, en la cual ordenó el recaudo de pruebas y se incorporó a las diligencias realizadas por la Fiscalía 41 de Tame (párr. 80 y 81).

De otra parte, la investigación adelantada en la jurisdicción penal militar tuvo muchos obstáculos, pues en primer lugar se abstuvo de iniciar un proceso penal en contra de los integrantes del Ejército adscritos al Batallón de Con-

⁶ Debido a los daños y saqueos a los bienes muebles y viviendas como consecuencia de los hechos ocurridos los días 13 y 14 de diciembre de 1998. Los saqueos fueron confirmados por la inspección realizada por una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior el 14 de diciembre. Por su parte, los daños a los bienes fueron confirmados por la inspección del 28 de diciembre ordenada por la Comisión de Fiscales Delegados dentro del radicado N.º 419 UNDH (párr. 79).

traguerrilla N°36 (párr.82)⁷; por otro lado, a pesar de que en diversas ocasiones se revocó este fallo inhibitorio, siempre recobraba vigencia la decisión de no iniciar una investigación en contra de la tripulación del helicóptero UH1H (párr. 83 al 92). No fue sino hasta el 17 de febrero de 2003 que, acatando la orden de la Corte Constitucional⁸, la jueza 121 de Instrucción Penal Militar remitió el expediente por la masacre de Santo Domingo a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (párr. 103).

El 19 de diciembre de 2003, en el marco de la jurisdicción penal ordinaria, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía acusó como presuntos responsables de homicidio culposo y lesiones personales culposas a C.R.P., J.J.V. y H.H.A. (párr. 105). El 26 de agosto de 2004, un fiscal delegado ante el Tribunal Supremo de Bogotá confirmó la resolución de acusación en contra de las personas mencionadas, en calidad de presuntos autores de diecisiete homicidios y dieciocho lesiones personales (párr. 106).

El 24 de septiembre de 2009, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dictó sentencia de primera instancia condenando a los tres miembros de la FAC, decisión que fue impugnada y fallada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala Penal, el 15 de junio de 2011. En dicha sentencia, se declaró la prescripción de la acción penal de las dieciocho lesiones personales por las que fueron condenados C.R.P., J.J.V. y H.H.A., y por lo cual modificó la sentencia impuesta a 360 meses de prisión y se absolvió al oficial H.H.A. (párr. 111, 113 y 160).

Más adelante, el 11 de octubre de 2011, se asignó al fiscal 22 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos para llevar a cabo la investigación penal de los pilotos y coroneles de la FAC, S.G.V., G.D.L.S. y C.A.G.M. El 18 de

⁷ El fallo inhibitorio se dio el 28 de diciembre de 1998 por el Juzgado 118 de Instrucción Penal Militar.

⁸ Ver Sentencia T-932 del 31 de octubre de 2002.

noviembre de 2011, el fiscal dejó en libertad al coronel S.A.G.V. y al mayor G.D.L.S. por vencimiento de términos (párr. 115 a 117).

Por su parte, la investigación preliminar disciplinaria inició el 13 de diciembre de 1998 y fue realizada por el director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación (párr. 120). El 13 de junio de 2000, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación contra el capitán C.R.P., el teniente J.J.V., el técnico de vuelo H.M.H.A. y el comandante del Batallón Contraguerrillas N.º 36 Comuneros mayor del Ejército J.M.G.G. (párr. 121). El capitán fue sancionado por haber violado el derecho internacional humanitario en el marco de dolo eventual, con suspensión en el ejercicio de su cargo por tres meses. El técnico de vuelo, por su parte, recibió la misma sanción a título de dolo eventual por disparar un dispositivo cluster a un blanco previamente seleccionado, teniendo conocimiento de que el objetivo estaba situado dentro del caserío cerca del lugar donde estaban reunidos la mayoría de los habitantes; el mayor J.M.G.G. y el teniente J.J.V. fueron absueltos (párr. 122 y 123).

Finalmente, el 25 de septiembre de 2000 fue interpuesta una demanda de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa y FAC- por el señor Alejandro Álvarez Pabón, en representación de las familias de dieciséis personas que murieron y trece que resultaron heridas. La demanda fue a causa de: (i) las muertes y lesiones causadas por el lanzamiento de una bomba cluster sobre la población civil de Santo Domingo desde un helicóptero de la FAC; y (ii) el saqueo y la destrucción⁹ de los bienes muebles e inmuebles de los miembros de la vereda Santo Domingo (párr. 124). Esta demanda fue resuelta el 20 de mayo de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, el cual declaró la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, durante los hechos del 13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo a favor de veintitrés grupos familiares, y se dispusieron las respectivas indemnizaciones (párr. 125).

⁹ “Del establecimiento El OASIS, de propiedad de Mario Galvis y Teresa Mujica; el saqueo y la destrucción del establecimiento Droguería y Misceláneas Santo Domingo, propiedad de María Panqueva; la destrucción del vehículo Chevrolet de placas UR-2408, de propiedad de Víctor Julio Palomino; el saqueo del establecimiento dedicado a la venta de prendas de vestir, zapatos y misceláneas, de propiedad de Henry Ferney Pastrana Vargas; y el incendio y destrucción total de una gasolinera, restaurante y hospedaje, de propiedad de María Antonia Rojas” (párr. 124).

El Ministerio de Defensa pagó al representante de las víctimas \$5.758.759.519,20¹⁰ por concepto de reparaciones e indemnizaciones por los hechos a los veintitrés grupos familiares (párr. 126).

Análisis de fondo realizado por la Corte Interamericana

Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

a) Pronunciamiento sobre el objeto del presente caso y el acto estatal denominado “Reconocimiento de responsabilidad”

El Estado reconoció la vulneración de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana frente a una parte de las víctimas del caso y sus familiares (párr. 129), por la violación del derecho a la verdad y el acceso a la administración de justicia.

La Corte IDH, alegando los principios de estoppel, buena fe, equidad procesal y seguridad jurídica, estableció que el Estado no puede variar sustancialmente su posición respecto de lo planteado durante el trámite del caso ante

la CIDH, debido a que presentó una hipótesis sobre los hechos con base en un fallo dictado en el marco de un proceso penal que no fue objeto de debate¹¹. En esos términos, la referida decisión no fue considerada como un hecho superviniente o complementario, porque (párr. 148) fue dictado en un proceso en el que no se investigaron las muertes de los civiles en los hechos de Santo Domingo (párr. 149).

La Corte Interamericana, además, reconoció que la afirmación del Estado respecto del referido acto “no implica reconocer ni aceptar los hechos presentados por la Comisión y por las víctimas”, por lo cual declara que el planteamiento del Estado queda insubsistente y no lo considera como un reconocimiento de responsabilidad, ni tiene efectos jurídicos (párr. 152).

b) Obligación de investigar y procesos internos

La Corte IDH consideró que, a pesar de los retrasos de la investigación en la jurisdicción penal militar, la Corte Constitucional colombiana atribuyó la competencia a la justicia penal ordinaria y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que dictara una nueva sentencia. Dicho Consejo, entonces, resolvió el conflicto de competencias a favor de la jurisdicción penal ordinaria, en la cual efectivamente continuó la investigación (párr. 101, 102 y 159).

Una vez la investigación se inició en la justicia ordinaria, se produjeron resultados tangibles, lo cual resultó en la acusación y el fallo de primera y segunda instancia en los que fueron condenados los miembros de la FAC (párr. 160). Sumado a lo anterior, no se pueden dejar de lado las investigaciones en la jurisdicción contencioso-administrativa; por el contrario, la Corte Interamericana las valoró positivamente y reconoció que contribuyeron a determinar la responsabilidad del Estado en este caso (párr. 167 y 168).

Asimismo, en la sentencia se estableció que no fue demostrado que el Estado dejara de realizar una investigación seria, diligente, exhaustiva y en un plazo razonable, sino que se consideró la contribución de los otros mecanismos y procedimientos internos en el esclarecimiento de la verdad y en la determinación de los alcances de la responsabilidad del Estado. En consecuencia, consideró que el Estado no violó los artículos 8 y 25 de la Convención en este caso (párr. 173).

Frente a la razonabilidad en el plazo para el desarrollo de la investigación, por cuanto puede constituir una violación de las garantías judiciales, en la sentencia se analizaron cuatro elementos para determinarla: i) complejidad del asunto; ii) actividad procesal del interesado; iii) conducta de las autoridades judiciales; y iv) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (párr. 164).

En este orden, se resaltó que este era un caso complejo, debido a los aspectos técnicos de la investigación, la pluralidad de víctimas y la cantidad de actores de la FAC y del Ejército que participaron en el contexto específico no solo del conflicto armado, sino también de la zona. A pesar de ello, se resaltó la labor de la Fiscalía General de la Nación para determinar los hechos y llevar a cabo la investigación (párr. 165).

En consecuencia, la Corte Interamericana consideró que no se demostró que el Estado incurriera en violación del artículo 8 de la Convención por exceder el plazo razonable en las investigaciones (párr. 165).

Violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, y a las medidas de protección de niños y niñas (artículos 4, 5 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), y violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

a) Las obligaciones de respetar los derechos a la vida y a la integridad personal, y las medidas de protección para niñas y niños

Un análisis conjunto de las violaciones alegadas a la vida, a la integridad personal y a las medidas de protección de la niñez en relación con las obligaciones de respeto y de garantía, condujo a que se interpretará el alcance de las obligaciones convencionales en forma complementaria con la normativa del derecho internacional humanitario, los Convenios de Ginebra de 1949, el artículo 3 común a los cuatro convenios, el Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados de carácter no internacional (del cual Colombia es parte), y el derecho internacional humanitario consuetudinario (párr. 187).

La Corte IDH examinó las alegadas violaciones a los artículos 4, 5, 19 y 2 en el siguiente orden:

1. El lanzamiento de un dispositivo AN-M1A2 sobre Santo domingo:

Al respecto, se determinó con base en la prueba aportada y lo alegado por las partes que la FAC fue responsable del lanzamiento de un dispositivo AN-M1A2 sobre el caserío de Santo Domingo a las 10:02 a.m. (párr. 195). Sumado a lo anterior, se deben tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación después de su investigación, en la que se identificaron seis posibles puntos de impacto que podrían corresponder a las seis bombas que componen el dispositivo cluster y que habrían caído en la proximidad del lugar donde se encontraban las víctimas (párr. 202).

En cuanto al aspecto referido, la sentencia reitera que las conclusiones de la Fiscalía fueron confirmadas por el Juzgado 12 Penal y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y no encuentra motivos para no acoger lo decidido a nivel interno en relación con este punto. Por tanto, la Corte no encontró méritos suficientes para considerar que las conclusiones de los peritajes de la Fiscalía fueron incongruentes con el resto de la prueba presentada en el presente caso (párr. 203).

En consecuencia, la Corte Interamericana concluyó que el dispositivo AN-M1A2 lanzado a las 10:02:09 a.m. del día 13 de diciembre de 1998 cayó efectivamente en la calle principal de Santo Domingo, provocando la muerte de las diecisiete presuntas víctimas y las heridas de otras veintisiete personas (párr. 210).

Así las cosas, la Corte IDH examina la responsabilidad del Estado en las afectaciones a la vida y a la integridad de las víctimas del bombardeo, y analiza los hechos del caso interpretando las disposiciones de la Convención Americana a la luz de las normas y los principios pertinentes del derecho internacional humanitario, en especial: a) el principio de distinción; b) el principio de proporcionalidad; y c) el principio de precaución (párr. 211).

2. Los presuntos ametrallamientos

En relación con el principio de distinción¹², sumado a las normas ya señaladas de derecho internacional humanitario (párr. 212), la Corte resaltó que son punibles dentro de ese mismo régimen normativo las conductas que constituyen ataques indiscriminados “en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar, como exige el derecho internacional humanitario [...] y que en consecuencia, pueden alcanzar indistintamente, [...] tanto a objetivos militares como a personas civiles” (párr. 234).

Asimismo, la Corte Interamericana recordó que la jurisprudencia del Tribunal Penal para la Ex-Yugoslavia señaló que “los ataques indiscriminados, es decir, los ataques que golpean a civiles o bienes civiles, y objetivos militares sin distinción, pueden calificar como ataques directos contra civiles”, y que estos “están expresamente prohibidos por el Protocolo Adicional I [343] [siendo que esta] prohibición refleja una regla bien establecida del derecho consuetudinario aplicable a todos los conflictos armados” (párr. 234).

En virtud de lo anterior, la sentencia sostiene que los pilotos de las aeronaves hicieron uso de sus armas a pesar de dudar sobre el carácter civil de las personas que se encontraban en la zona, lo que demuestra despreocupación por la vida y la integridad de esas personas, en incumplimiento del principio de distinción (párr. 212 y 235).

Teniendo en cuenta los hechos y el acervo probatorio, la Corte Interamericana constató que los actos de miembros de la FAC implicaron un incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de los pobladores de Santo Domingo, que se vieron afectados por la puesta en riesgo de sus derechos al haber sido objeto de ataques indiscriminados (párr. 237).

¹² Es una norma que establece que “[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes”, que “[l]os ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes” y que “[l]os civiles no deben ser atacados” (párr. 212).

3. La alegada violación de las medidas de protección a favor de niñas y niños

La Corte Interamericana dio por probado que, como consecuencia de los hechos del 13 de diciembre de 1998 en la vereda de Santo Domingo, fallecieron seis niños y niñas y otros diez resultaron heridos (párr. 70). Sumado a lo anterior, varias personas menores de edad de Santo Domingo se vieron forzados a desplazarse de los ataques desproporcionados realizados por la FAC (párr. 240 y 267).

En consecuencia, en la sentencia se afirma que el Estado incumplió con su deber de protección especial de niñas y niños afectados por los hechos de Santo Domingo, toda vez que no cumplió con su obligación especial de protección en el marco de un conflicto armado no internacional. En consecuencia, la Corte consideró que las declaradas violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal deben entenderse en relación con la violación del artículo 19 de la Convención en perjuicio de los niños y las niñas que fallecieron (párr. 241).

4. La alegada violación del derecho a la integridad de los familiares

La Corte Interamericana declaró la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares directos de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos, aplicando una presunción iuris tantum respecto de familiares directos¹³, con lo que responde a las circunstancias particulares del caso (párr. 242).

¹³ De acuerdo con un peritaje psicológico aportado, las personas entrevistadas presentaron síntomas crónicos de estrés postraumático que incluyen: “a) pensamientos recurrentes de los hechos; recuerdos perturbadores que se aparecen espontáneamente; b) reacción de ansiedad extrema a esos pensamientos y recuerdos; c) pesadillas y otros sueños que evocan la masacre; d) reacciones espontáneas físicas y emocionales ante elementos de la vida cotidiana que se asocian con los eventos de la masacre, reacciones tales como taquicardia, sudor, miedo intenso al ruido de un helicóptero o avión, o de un tiroteo; e) tristeza y sentimientos de dolor al evocar la masacre; f) insomnio; y g) percepción del daño como irreparable, impotencia, sentimiento que la vida ha cambiado su curso, percepción de futuro incierto y angustioso”. Además de lo anterior, la Corte recuerda que, según se desprende de la prueba, los familiares de las víctimas tuvieron que enfrentar los efectos de la masacre en sus seres queridos (párr. 243).

Por lo anterior, en la sentencia se consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 (párr. 244).

5. El alegado incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana

Estimó que no correspondía analizar los hechos a la luz del artículo 2 de la Convención, porque no encontró probada la relación entre la inexistencia de un marco legal que desarrolle de manera efectiva la obligación de proteger los derechos humanos y la actividad de empresas transnacionales en su territorio (párr. 245 y 246).

Por otro lado, determinó que el Estado era responsable por: la violación del derecho a la vida, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las personas fallecidas; del derecho a la integridad personal, en relación con el Artículo 1.1, en perjuicio de las personas que fueron heridas, así como de los familiares de todos ellos; y del derecho a las medidas de protección de niñas y niños, en perjuicio de los niños y las niñas muertos y heridos en los mismos hechos (párr. 247).

Violación del derecho de circulación y residencia, y a la propiedad privada (artículos 22 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

a) Derecho de circulación y residencia

La Corte Interamericana resaltó la relevancia de los Principios Rectores emitidos en 1998 por el representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno, los cuales se basan en normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Consideró que estas directrices permiten integrar el contenido y alcance del artículo 22 de la Convención en el contexto de desplazamiento forzado interno (párr. 256).

En efecto, las personas sobrevivientes a los hechos ocurridos en Santo Domingo los días 13 y 14 de diciembre de 1998 se vieron forzadas a salir de sus lugares de residencia habitual hasta enero de 1999, aproximadamente. Se tiene claro que lo anterior fue una consecuencia de la explosión del dispositivo cluster en la vereda de Santo Domingo (párr. 210), sumado al miedo y a las afectaciones psicológicas que les generaron los enfrentamientos cercanos, así como los ametrallamientos (párr. 243 y 267).

En consecuencia el Estado es responsable de la violación del artículo 22.1 de la Convención, en relación con los artículos 5.1 y 1.1, respecto de determinadas víctimas (párr. 268).

b) Derecho a la propiedad privada

La Corte IDH destacó la importancia de interpretar los alcances del artículo 21 de la Convención a la luz de otros tratados internacionales, como el Protocolo II de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados de carácter interno, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario consuetudinario (párr. 270).

En primera medida, se debe tener en cuenta que la norma 7 de derecho internacional humanitario consuetudinario dispone que “las partes en [un] conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques sólo podrán dirigirse contra objetivos militares. Los bienes de carácter civil no deben ser atacados” (párr. 271)

En vista de lo anterior, en la sentencia se afirma que debido a las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos y en especial por la condición socioeconómica y de vulnerabilidad de la presuntas víctimas, los daños ocasionados a su propiedad pueden tener un efecto y magnitud mayores, puesto que enfrentan un incremento en el grado de afectación a sus derechos dada su situación de mayor vulnerabilidad (párr. 273).

De este modo, y con base en el material probatorio, la Corte IDH afirmó que los daños a la propiedad en la vereda de Santo Domingo y sus alrededores fueron el resultado del lanzamiento del dispositivo cluster¹⁴ y de los enfrentamientos¹⁵ que tuvieron lugar en este caserío el día 14 de septiembre de 1998 (párr. 279 a 281).

¹⁴ Daños a las propiedades de Mario Galvis, Víctor Palomino, Margarita Tilano y Olimpo Cárdenas.

¹⁵ Daños a la propiedad de María Cenobia Panqueva.

Finalmente, declaró que el Estado es responsable por la violación del Artículo 21 de la Convención en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de los dueños de las tiendas y viviendas afectadas (párr. 282).

Violación del derecho a la honra¹⁶ (artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

La Corte Interamericana estimó que del acervo probatorio no se puede afirmar que los funcionarios promovieron versiones de los hechos en las que se considerara a los pobladores de Santo Domingo como colaboradores e integrantes del grupo guerrillero FARC (párr. 287).

Por lo anterior, sostuvo que no fueron presentados elementos de prueba suficientes para analizar los hechos a la luz del artículo 11 de la Convención Americana (párr. 289).

¹⁶ Debe ser entendido este derecho como aquel que “reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona”. Caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de enero de 2009. Serie C N.º 193 (párr. 57).

Medidas de reparación y órdenes de la Corte Interamericana

Medidas de Satisfacción

a) Acto público de reconocimiento de responsabilidad

La Corte Interamericana ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional declarada en los términos de la sentencia, en el cual se haga referencia a los hechos del caso, el cual deberá ser realizado dentro del plazo de seis meses a un año contado a partir de su notificación, contar con altos funcionarios del Estado y transmitido por medios de comunicación televisivos y/o radiales (párr. 301).

Todos los aspectos de dicho acto deberán acordarse con las víctimas y sus representantes dentro de los seis meses posteriores a la notificación de esta sentencia. Para garantizar la presencia de las víctimas que no residan en la vereda de Santo Domingo y que deseen asistir a dicho acto, el Estado colombiano deberá sufragar los gastos de transporte necesarios (párr. 302).

b) Publicaciones

La Corte Interamericana dispuso que el Estado publicara, en un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia: a) el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional; y c) la presente sentencia en su integridad, disponible por un periodo de un año, en un sitio web oficial (párr. 303).

c) Obligación de investigar

Con respecto a la obligación de investigar, la Corte IDH señaló que no fueron declaradas violaciones en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (párr. 173). Sin embargo, el Estado debe continuar las investigaciones y procesos administrativos y judiciales en curso, y continuar las demás que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades (párr. 297).

Medidas de Rehabilitación

La Corte Interamericana señaló que el Estado debería brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma adecuada y efectiva, la atención y el tratamiento médico, psicológico o psicosocial a las víctimas y a los familiares que así lo soliciten, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos y exámenes que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de

cada uno de ellos. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la medida de lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento psicológico o psicosocial, se debía considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acordara con cada una de ellas y después de una evaluación individual (párr. 309).

Otras medidas solicitadas

La Corte Interamericana instó a Colombia a cumplir sus compromisos de continuar implementando todas las medidas necesarias para adoptar y fortalecer, con la respectiva disposición presupuestaria, un programa o curso obligatorio como parte de la formación general y continua de la FAC, en todos los niveles jerárquicos, que contemplara, entre otros, cursos o módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos y sobre los principios del derecho internacional humanitario que guían el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (párr. 320).

Indemnización

En la sentencia se sostiene que no corresponde ordenar reparaciones pecuniarias adicionales, sea por daño material o inmaterial, a favor de los familiares de las víctimas fallecidas, ni de las personas heridas en los hechos, pues ya habían sido indemnizadas por el Estado colombiano (párr. 336).

Respecto de las víctimas heridas, así como de cinco familiares de dos víctimas fallecidas, la Corte estimó que el Estado debía otorgar y ejecutar, en el plazo de un año y a través de un mecanismo interno expedito, las indemnizaciones y compensaciones pertinentes por concepto de daños materiales e inmateriales, si les correspondiere, las cuales debían fijarse con base en los criterios objetivos, razonables y efectivos de la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana. Los familiares de víctimas que consideraran que eran beneficiarios de esta disposición debían presentarse ante las autoridades estatales correspondientes a más tardar en el plazo de tres meses contado a partir de la notificación de esta sentencia (párr. 337).

Costas y gastos

La sentencia estableció que el Estado debía pagar, por concepto de costas y gastos, la suma de USD¹⁷ 5,000.00 que serán divididos entre la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), Humanidad Vigente Corporación Jurídica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, según les corresponda (párr. 344).

Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

La Corte IDH determinó que el Estado debía efectuar el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente sentencia directamente a las organizaciones indicadas allí, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación del fallo (párr. 345).

¹⁷ Dólares estadounidenses.



Defensoría del Pueblo

COLOMBIA

Defensoría del Pueblo
Carrera 9 No. 16-21 piso 7
Tel. 57+1 314 4000
57+1 314 7300
Bogotá D.C., Colombia
www.defensoria.gov.co
info@defensoria.org.co



Defensoría del Pueblo
Dirección: Cra 9 No. 16-21
Bogotá - Colombia
www.defensoria.gov.co